

cuyo único pecado ha sido el haber confiado en unos cursos promovidos por el propio Ministerio de Educa-

ción. El país, evidentemente, no está para esos lujos. ■ JOAQUIN RABAGO.

SANIDAD

LOS M. I. R. VUELVEN A LA HUELGA

Entre dos mil y dos mil quinientos MIR se mantienen en huelga en unos veinticuatro centros sanitarios de trece provincias españolas. Sus reivindicaciones datan ya de hace varios años. Pero la falta de diálogo y la política de hechos consumados que se achaca a la dirección del INP han revitalizado el conflicto.

La huelga anterior finalizó en octubre del pasado año por un acuerdo entre la Comisión Nacional de los MIR y la delegación del INP. El delegado general del INP, señor Martínez Estrada, se comprometió entonces por escrito, con sello y firma del INP, a eliminar el certificado de buena conducta, aumentar los salarios y no vetar a ningún médico en su trabajo. Así como a continuar las negociaciones sobre las restantes reivindicaciones de los MIR «si prosigue la normalidad asistencial».

Y la normalidad asistencial continuó, pese a que los aumentos salariales fueron menores de los pedidos y a que se mantuvo el veto a ocho médicos expulsados varios meses antes de un hospital de Bilbao. Hasta el punto de que la misma suspensión durante meses de las conversaciones MIR-INP no hubieran quizá provocado el conflicto abierto de no mediar una nueva decisión de las autoridades del Instituto.

La chispa final vino hace pocos días de la mano del presidente del Consejo General de Médicos, señor Lafuente Chaos, quien comunicó oficiosamente a varios representantes de los MIR las condiciones de un nuevo contrato elaborado, sin participación alguna de la Comisión Nacional de los MIR, entre el INP y el señor Lafuente.

Esta actuación unilateral, sin contar con los representantes elegidos, y las características del nuevo contrato que, además de ser administrativo y no laboral, es «impreciso y caduco» en opinión de los médicos, y «no satisface las necesidades laborales de los MIR», condujo a una protesta generalizada, expresada mediante un escrito con más de mil firmas de médicos de toda España.

Pero la delegación de los MIR que llevó la carta no consiguió entrevistarse con los responsables del INP. El nuevo intento de diálogo y de reanudación de las conversaciones no dio resultado.

Sólo entonces las asambleas de los MIR decidieron ir a la huelga, mostrando su disposición permanente al diálogo, pero exigiendo que el INP se defina sobre sus reivindicaciones, concretadas fundamentalmente en: contratos de carácter laboral; salarios de 20.000, 22.000, 24.000 y 26.000 pesetas, con revisión

semestral según el alza del coste de la vida; retribución de las guardias a 2.000 pesetas; 100 por 100 del salario en caso de accidente o enfermedad; Seguridad Social e IRTP a cargo de la empresa; derecho a guardería infantil para sus hijos; abolición de las cláusulas represivas del contrato; composición paritaria y elección democrática y autónoma de las comisiones de educación médica; elaboración del reglamento de régimen interior por representantes elegidos de todos los estamentos y reconocimiento de la Comisión Nacional de los MIR como única representativa y con capacidad negociadora con el INP.

En torno a estos puntos, que los MIR consideran absolutamente necesarios como reconocimiento de su condición de trabajadores de la sanidad y no de becarios, se va extendiendo la huelga. De Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Oviedo y Murcia pasa a Toledo, Salamanca, Santander, Barcelona, Santiago y La Coruña, Cartagena y Albacete...

En todos los centros se respetan las guardias y atenciones de urgencia. En muchos casos, como en las clínicas de La Concepción y Puerta

de Hierro, de Madrid, los médicos explican a los enfermos y a sus familiares las causas del conflicto. En otros comienza a darse la solidaridad de los médicos en plantilla, que se suman al paro o apoyan de diversas formas a los MIR.

Mientras, los médicos internos y

residentes dan a la huelga un carácter indefinido «como única forma de forzar al diálogo al que siempre estaremos dispuestos» y hacen responsable al INP «del posible déficit asistencial que se derive de esta situación». ■ ENRIQUE BUSTAMANTE.

PRENSA

ANTONIO GUERRA, ANTE EL T.O.P.

El jueves 12, algunos diarios informaban de varios hechos relacionados con los periodistas y la Prensa española: el secuestro del último número de «Cuadernos para el Diálogo»; la detención del director de la revista regional aragonesa «Andalán», Eloy Fernández Clemente, y el envío de telegramas desde varias Asociaciones de la Prensa pidiendo su puesta en libertad; la absolución definitiva, al desistir el fiscal de la Audiencia de Barcelona de presentación de un recurso de casación, del ex director de «Destino», Xavier Montsalvatge; la presentación, en fin, en el Ministerio de Información y Turismo de un escrito dirigido al titular de dicho departamento, León Herrera, y en el que ciento cincuenta periodistas madrileños expresaban su preocupación por la crítica situación por la que atraviesan los periodistas y la Prensa y planteaban una serie de reivindicaciones (supresión de las jurisdicciones es-

peciales para delitos de Prensa, protección del ejercicio informativo, medidas que amparen el secreto profesional, modificación de la Ley de Secretos Oficiales...) «en el contexto de unas libertades públicas que caractericen un Estado de Derecho».

Este mismo día, a las cinco y media de la tarde, comparecía ante el Tribunal de Orden Público el periodista sevillano Antonio Guerra, ex redactor de «Diario de Barcelona», procesado como presunto autor de un delito contra las Leyes Fundamentales por su artículo «Contra la elección de una "miss"», publicado en el «Brusi» el 2 de julio de 1974. Un artículo en el que Antonio Guerra comentaba la oposición de la Sección Femenina de La Coruña a que el Ayuntamiento de dicha capital organizara la elección de «Miss España» («las chicas del Movimiento han considerado que el Ayuntamiento no está para

